



Una evaluación de los gobiernos Kirchner: el impacto sobre la exclusión social de los cambios en las políticas sociales argentinas

Giuseppe M. Messina*

Índice

1. Un cuadro de la evolución económica de la Argentina kirchnerista; 2. El debate sobre la fase de crecimiento pos-convertibilidad; 3. Entre coyuntura económica y transformación de las políticas públicas; 4. Conclusiones

Palabras clave

Argentina, políticas sociales, exclusión social

1. Un cuadro de la evolución económica de la Argentina kirchnerista

La recuperación de la economía argentina¹ luego de la crisis sistémica de 2001-2002 ha sido muy significativa, registrándose un crecimiento medio del producto interior bruto (Pib) de 8,5% por año entre 2003 y 2011². Sin lugar a dudas, puede hablarse de crisis sistémica en relación a los años 2001 y 2002, ya que lo acontecido en ese bienio supuso la conjunción simultánea de múltiples crisis. Se dio una crisis económica (que venía gestándose desde 1998, en parte por contagio de las crisis financieras en Asia oriental, Rusia y Brasil) que afectó las cuentas fiscales del País. Ambos fenómenos se retroalimentaban por causa de los sucesivos intentos de ajuste de las cuentas públicas, desembocando en una crisis de confianza en la deuda pública argentina, lo que finalmente generó una fuga de capital y una crisis bancaria. Los intentos desesperados de controlar la fuga de dólares restringiendo la disponibilidad de los ahorros (el célebre «corralito») terminaron desencadenando una grave crisis política, que se manifestó en protestas callejeras bajo forma de cacerolazos. La conclusión trágica, con víctimas mortales, de estas protestas condujo a la renuncia del presidente

* Universidad de Buenos Aires.

¹ Una versión preliminar de este artículo fue presentada en el II Congreso internacional en *Gobierno administración y políticas públicas*, organizado por el Gigapp (Grupo de investigación en gobierno, administración y políticas públicas), Instituto universitario de investigación Ortega y Gasset, Madrid, 12-13 septiembre 2011.

² Los datos de la variación del Pib contenidos en el artículo derivan de la base de datos en línea «World economic outlook» del Fondo monetario internacional (Fmi).



Fernando De la Rúa, a la sucesión de 4 presidentes en la semana final de 2001, y a la definitiva asunción del representante de la oposición peronista, Eduardo Duhalde. En los mismos días se dio lugar a una doble crisis de la deuda (el default) y monetaria (el fin de la convertibilidad, la norma que fijaba la paridad entre peso argentino y dólar de Estados Unidos desde 1991). De fondo, se registraba el ulterior recrudecimiento de la crisis laboral y social del País, con los índices de pobreza e indigencia que alcanzaron niveles inéditos, afectando a más de mitad de la población.

No obstante, el País retomó pronto la senda del crecimiento ya a partir de 2003, en coincidencia temporal con la celebración de nuevas elecciones, cuando accedió al poder Néstor Kirchner, al frente de una coalición de diputados peronistas con trásfugas progresistas de otros partidos. Debe recordarse que Kirchner accedió al poder con solo el 22% de los votos, por la renuncia del ex presidente Carlos Menem a presentarse a segunda vuelta, donde lo esperaba según las encuestas una derrota sonada. Por esta razón, el gobierno Kirchner buscó legitimarse tanto a través de una valerosa política a favor de los derechos humanos y contra los crímenes de la dictadura militar de 1976, pero, sobre todo, en razón de los resultados obtenidos en el ámbito económico y en la mejora del mercado laboral. De hecho, ha sido una constante en la retórica oficialista referirse a la presente fase política como la «salida del infierno»³, en alusión a la acción política de la administración en recuperar exitosamente al País de la grave crisis que vivía.

No obstante, por todo lo que se ha dicho anteriormente, en toda discusión posterior debe precisamente evitarse el «espejismo» estadístico que deriva de comparar los datos recientes con los picos (o abismos) alcanzados durante ese bienio de grave e intensa crisis. Por esa razón, en la medida de lo posible, se intentará siempre contrastar los datos de la década pasada con los datos relativos a los años Noventa. Se toma esta década como base de comparación, ya que desde el gobierno se atribuyen las causas de la crisis de 2001-2012 precisamente al régimen de crecimiento vigente durante los años Noventa, bajo la convertibilidad, e inspirado, para simplificar, en políticas de carácter neoliberal. Sólo de esa forma, será posible evaluar objetivamente la distancia entre la retórica política y la naturaleza de los resultados obtenidos por la administración Kirchner (2003-2007) y el primer mandato de su sucesora, su esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2008-2011). La discusión adquiere un carácter relevante a la luz del debate sobre la ola de gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana en la primera década de este siglo, del que el caso argentino constituye un caso interesante por su difícil colocación entre izquierdas moderadas y las denominadas izquierdas populistas⁴.

Para tener un primer cuadro preliminar del periodo considerado, la Fig.1 permite examinar la relación entre el crecimiento del Pib y la evolución de la tasa de pobreza e indigencia para los hogares. Las cifras que se refieren a los individuos son similares,

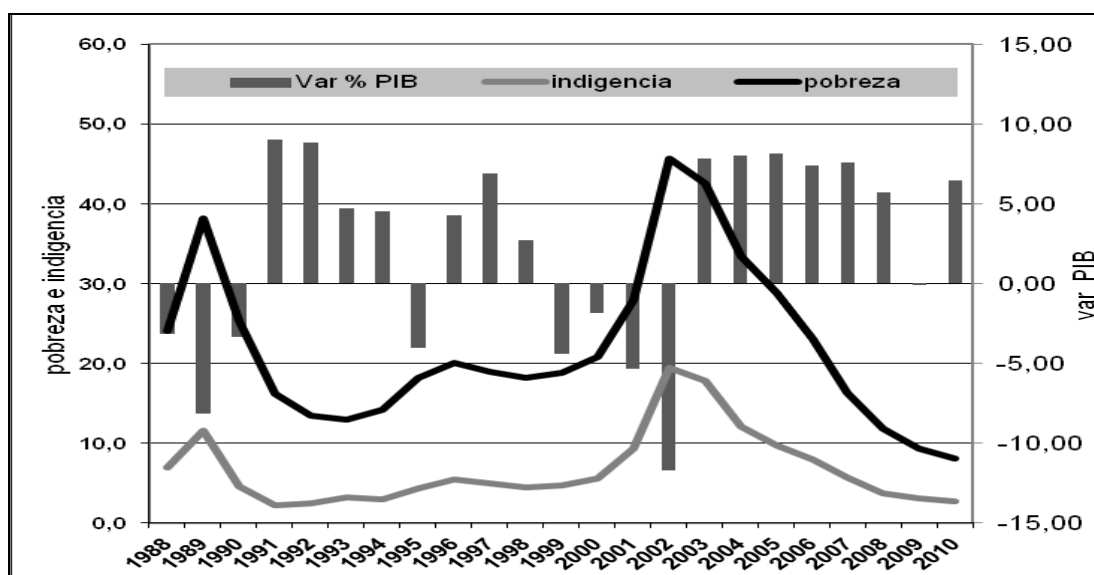
³ Cfr. por ejemplo el *Discurso de la presidenta Cristina Fernández en la apertura del 129° período de sesiones ordinarias del congreso nacional*, contenido en línea (acceso 22/11/2011): <http://www.cfk-argentina.com.ar/2011/03/discurso-de-la-presidenta-cristina.html>.

⁴ Véase la discusión en Panizza y Romielli (2009) sobre la separación entre gobiernos “malos” populistas y “buenos” socialdemócratas, donde se alistan con claridad entre los primeros los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Hugo Chávez en Venezuela.



aunque mayores, ya que la pobreza afecta más que proporcionalmente a los hogares numerosos. Puede verse cómo el periodo de crecimiento iniciado en 2003 ha permitido reducir considerablemente las tasas de pobreza e indigencia, a niveles similares a los registrados a principios de los años Noventa, después de los máximos históricos registrados en 2002.

Fig.1 - Crecimiento económico y pobreza en Argentina (1988-2010)



Fuente: Elaboración propia sobre datos Cedlas (2011) y Fmi (2011).

Antes de continuar, es necesaria una premisa. Más allá de las notas metodológicas usuales en estos casos⁵, deben señalarse las dificultades que aquejan a los investigadores desde que a principios de 2007 el organismo que elabora las estadísticas nacionales, el Indec, fuera intervenido por el gobierno. A partir de ese año, ha crecido el nivel de distorsión entre el crecimiento de los precios reflejado en las estadísticas oficiales y la percepción social del mismo, evidente tanto en las estimaciones alternativas⁶ como,

⁵ Los datos de pobreza y desigualdad se encuentran en la base de datos Socio-economic database for Latin America and the Caribbean (Sedlac) elaborada por el Centro de estudios distributivos, laborales y sociales (Cedlas) de la Universidad nacional de la Plata en colaboración con el Banco mundial. Las estadísticas se elaboran sobre la base de estimaciones oficiales del Instituto nacional de estadística y censos (Indec) de la República argentina, basadas en la Encuesta permanente de hogares (Eph) que cubre el universo urbano del País, aunque con cobertura variable según los años. Los datos más recientes cubren alrededor de un 70% de la población urbana, es decir son representativas del 60% de la población total. Para más detalles metodológicos, véase Cedlas (2010).

⁶ Por ejemplo, las direcciones provinciales del Indec no intervenidas reportan tasas de inflación, que duplican los datos oficiales a partir de ese año (mientras anteriormente a 2007 mostraban una evolución similar). Lo mismo ocurre para las estimaciones elaboradas por algunas consultoras privadas, que generalmente se basan en esos datos provinciales (Lindenboim, 2011).



implícitamente, en los incrementos salariales pactados en convenios colectivos, en media superiores en más del doble a las cifras oficiales.

En un cuadro de este tipo, la recuperación de los salarios reales ha sido en realidad menos significativa de lo que registran las cifras oficiales. Debe recordarse que la devaluación, combinada con la inflación de los años 2002 y 2003, condujo a una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 30%. Los salarios recuperaron su poder adquisitivo sólo en la primera parte de 2007. A partir de ahí la evolución es más incierta. Según los datos oficiales, los salarios medios habrían crecido un 50%. Al contrario, si se descuentan los salarios por un índice de inflación estimado según los organismos provinciales no intervenidos, los salarios reales habrían permanecido estables entre 2007 y 2010 (Lindenboim, 2011: 28).

Obviamente la incertidumbre sobre los datos de la inflación se propaga a todo el sistema estadístico; por ejemplo al crecimiento real del Pib, y especialmente a la estimación de la pobreza y la indigencia, que se basan precisamente en comparar los ingresos individuales o familiares con una canasta de bienes y servicios básicos. Si el precio de esa canasta ha crecido por encima de las estimaciones oficiales, de allí deriva una subestimación de la pobreza e indigencia por parte del Indec y del gobierno.

Un informe del Centro de investigación y formación de la república argentina (Cifra) del sindicato Central de trabajadores de la Argentina (Cta) estima, por ejemplo, que los niveles de pobreza e indigencia serían el doble de lo estimado por el gobierno (es decir alrededor del 20% y 6% respectivamente). De hecho, como ya en el caso de los salarios, la mejora de estos dos indicadores habría perdido fuelle desde 2007. Este informe basa su estimación en una cifra de inflación sobre la base de la inflación registrada en siete provincias del interior y sostiene que la inflación al consumo acumulada entre enero de 2005 y diciembre 2010 fue de alrededor de un 118%, contra un valor acumulado del 37% según los datos oficiales del Indec⁷ (Cifra-Cta, 2011).

Ambos conjuntos de indicadores parecen indicar la existencia de dos subperíodos diferentes en el denominado «modelo de la posconvertibilidad»: una primera fase que dura hasta 2007 caracterizada por un ciclo virtuoso de mejora de los indicadores sociales, recuperación del empleo (como se verá a continuación), solidez macroeconómica (los llamados superávits gemelos, fiscal y externo) e inflación moderada; desde 2007, los cimientos del modelo sufren embestidas crecientes, en términos de mayores desequilibrios macroeconómicos, problemas inflacionarios y reducción de la tasa de mejora de los indicadores sociales y laborales. Frente a esta situación el gobierno ha reaccionado con un incremento de su activismo en el ámbito de las políticas sociales y un mayor intervencionismo económico, como se verá en la sección 3.

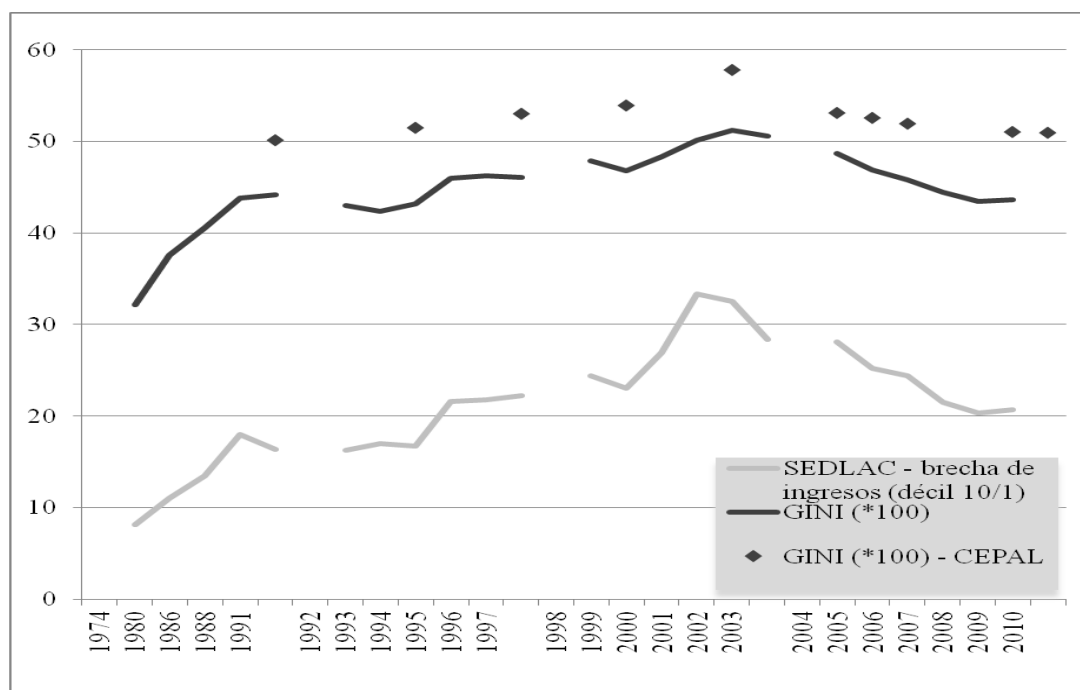
Respecto a la evolución de la desigualdad de los ingresos, los resultados una vez más no son del todo concluyentes (véase Fig.2). La figura muestra que en correspondencia con la crisis se alcanzó un máximo nivel de desigualdad en el largo proceso de

⁷ Hasta enero de 2007, antes de la intervención, los indicadores calculados sobre los datos oficiales y las elaboraciones de investigaciones independientes habían evolucionado de manera paralela.



empeoramiento distributivo que tuvo comienzo a partir de la época de la dictadura. Efectivamente, después de 2003, se ha registrado una reducción tanto en términos del índice de Gini como de la relación entre los ingresos percibidos por el decil (el 10%) más rico y el decil más pobre de la población. Sin embargo, el nivel de desigualdad sigue siendo relativamente elevado, similar o superior a las cifras relativas a los primeros años Noventa, en plena época de reformas estructurales y después de una severa crisis hiperinflacionaria.

Fig.2 - Distribución del ingreso de los hogares



Fuente: Elaboración propia sobre datos Cedas (2011) y Cepal (2011).

2. El debate sobre la fase de crecimiento pos-convertibilidad

Una evaluación de las dos administraciones que se han sucedido en el gobierno a partir de 2003, tanto la de Néstor Kirchner como la Cristina Fernández de Kirchner, debe entonces tener en cuenta los elementos que se detallaron en la sección anterior.

Es indudable que la política económica del gobierno argentino en estos años ha supuesto un cambio en términos de una mayor intervención directa del Estado en el funcionamiento de los mercados. Algunos rasgos de esta nueva fase de la política económica surgen a raíz de la crisis, entre ellos el default parcial y canje de parte de la deuda pública, la devaluación y posterior manejo de la tasa de cambio a niveles inicialmente muy competitivos. Otros derivan de circunstancias externas favorables, en particular, del elevado crecimiento del comercio mundial hasta 2008 y las crecientes



necesidades de materias primas por parte de las economías emergentes, especialmente China, lo que ha significado volúmenes y precios crecientes para algunos productos de exportación argentinos, primero entre todos la soja.

Otros rasgos de la nueva etapa van conformando un equilibrio de fuerzas entre los grupos económicos y otros lobbies, que se juega a través de la intervención del Estado en determinados mercados, a través de regulaciones, subsidios y *moral suasion*, que se manifiesta en transferencias de recursos de un sector al otro. En un cuadro con estas características, debe analizarse en qué medida los grupos de menores recursos se beneficiaron de esta fase de crecimiento, sin limitarse a observar las desigualdades de ingresos y la pobreza, sino también evaluando el nivel de acceso al conjunto de derechos sociales básicos (educación, salud, vivienda), cuya negación está en la base de los procesos de exclusión social. Sólo si se diera una sustancial mejora en estos aspectos podría decirse que la retórica gubernamental del llamado «nuevo modelo de crecimiento con inclusión social» se basa sobre la realización de adelantos sólidos y reales.

A la hora de evaluar el período actual, obviamente, se entrecruzan diferentes reflexiones tanto respecto a la anterior época de la convertibilidad como a las causas que provocaron la crisis de 2001-2002. Una evaluación de los últimos años no puede hacerse sino contrastándolos con el periodo anterior. No hay espacio en esta sede para una reseña detallada de la literatura de análisis sobre la época «kirchnerista», como se denomina en el lenguaje común a la etapa marcada por las administraciones consecutivas del matrimonio Kirchner. Sin embargo, es posible extraer del debate – por lo menos – tres posiciones.

Una primera posición deriva de una visión positiva de la época de la convertibilidad. Según esta opinión las reformas pro-mercado, implementadas principalmente durante el primer mandato de Menem, iban en la dirección correcta. El objetivo de estas reformas era loable: transformar radicalmente el fallido Estado argentino, de carácter desarrollista y origen peronista, para favorecer el desarrollo de la iniciativa privada, empezando por la reconstrucción de las instituciones que garantizan el desarrollo a largo plazo de un País (protección de la propiedad privada y de los contratos, estabilidad de las políticas económicas, a través del mecanismo de la convertibilidad, etc.). Se trataba de regresar al espíritu de *laissez faire* que imbuía al País en la exitosa etapa primario exportadora previa al golpe de 1930, le época dorada en la que Argentina se situaba entre los Países más ricos del mundo⁸.

Según esta perspectiva, la crisis de 2001-2012 deriva de una combinación de circunstancias negativas (la devaluación del real brasileño, la crisis mundial a caballo del siglo, etc.) y, sobre todo, de no haber sabido profundizar y completar el proceso de reforma, de haber caído presa del intervencionismo y de la indisciplina fiscal. El proceso de reformas estuvo obstaculizado en todo momento por los costes sociales del

⁸ La tesis que sitúa el quiebre en la evolución institucional del País en surgimiento del peronismo se encuentra muy transitada. Entre los muchos trabajos más o menos recientes, pueden verse por ejemplo Waisman (1987) o el trabajo de Gerchunoff y Fajgelbaum (2006). Un análisis clásico de la rotura del modelo agroexportador es el de Díaz Alejandro (1975).



mismo y la acción opositora de los grupos afectados (sindicatos, desocupados, etc.), lo que condujo a la explosión de la deuda externa pública.

Desde esta posición se ve en la época actual una reedición de los errores de etapas anteriores: el intervencionismo en el mercado, un creciente proteccionismo y sesgo anti-exportador que produce un aislamiento de las dinámicas del mercado mundial. Este aspecto resultaría evidenciado por la comparación entre las dinámicas exportadoras de Argentina y Brasil, aunque ha sido ocultado por el incremento del precio de las commodities (Ieral, 2011). Se señala además la discrecionalidad del poder decisorio del gobierno, con el consecuente decaimiento del Estado de derecho (respecto a la vigencia de los contratos con las privatizadas, por ejemplo), el ataque permanente a la separación de poderes (por ej. las presiones sobre el poder judicial) y a la libertad de expresión (la nueva ley de medios, considerada un ataque a los medios de comunicación no oficialistas, por otra parte predominantes). Este nivel de inseguridad jurídica, reflejado en los bajos resultados obtenidos por Argentina en índices como el de percepción de la corrupción (elaborado por Transparencia internacional) o el índice de «imperio de la ley» (publicado por el World justice project), perjudicaría el clima inversor, comprometiendo el crecimiento a largo plazo de la economía. Todos estos rasgos negativos del modelo suelen recibir la etiqueta generalizadora, de moda tanto en los medios de comunicación como en la academia europea, de populismo o «neo-populismo»⁹.

En resumidas cuentas, esta perspectiva enfatiza que en el caso argentino el peso de las circunstancias favorables (el llamado viento de cola) consiguen explicar más efectivamente el crecimiento de estos años y advierte que las consecuencias, en el largo plazo, de alejarse del sendero ideal de una economía capitalista abierta y de libre mercado, constituyen un impedimento a un crecimiento genuino y sustentable en el tiempo¹⁰.

Debe decirse que esta postura favorable a recuperar los principios guía de la etapa de la convertibilidad no encuentran muchos voceros explícitos en el ámbito político, dada la impopularidad de la época menemista a quien la mayoría de la población atribuye la culpa de la crisis sistémica de 2001-2002 (como demuestran el fracaso de su campaña presidencial de 2003). Sin embargo, las crecientes contradicciones (y conflictos políticos) de la etapa de crecimiento actual, que se evidencian en particular en el problema de la inflación y en su parcial ocultamiento por parte del gobierno, tema ya tratado con anterioridad, dan alas periódicamente a las posiciones que reclaman una menor intervención del Estado en la economía para reducir distorsiones y mejorar la eficiencia y la competitividad del País.

Un ejemplo muy significativo del cuestionamiento del «modelo» fue el conflicto con el sector agropecuario en la primera mitad de 2008, en torno a las retenciones a las exportaciones. Según algunos autores se trató de un verdadera pugna para obtener la hegemonía política sobre el desarrollo futuro del País, entre el gobierno y las clases

⁹ Un ejemplo refinado de esta perspectiva se encuentra por ejemplo en Caballero y Gallo (2008).

¹⁰ Cfr. la opinión de Mariano Teijeiro, *La economía crece más por suerte que por un modelo*, en «Página 12», 2 Noviembre de 2003. En la página web del Centro de estudios públicos (Cep), fundado por iniciativa del mismo Teijeiro, están contenidos una serie de artículos del mismo tenor muy críticos con la actual gestión.



dominantes del agro pampeano (Basualdo, 2011). En el corto plazo, el *lockout*, o «paro del campo», ejerció una acción de desgaste sobre la popularidad del gobierno que, junto con los efectos recesivos de la crisis económica mundial de 2008 sobre el crecimiento argentino, condujeron a la derrota del oficialismo en las legislativas de 2009. Sin embargo, la fuerte recuperación económica del bienio sucesivo, la conmoción popular por la muerte de Néstor Kirchner en 2010, y la implementación de algunas medidas estrella que se tratarán más adelante (como la «asignación universal por hijo»), condujeron a la aplastante reelección de Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 2011 con cerca del 54% de los votos¹¹.

Desde una postura política opuesta se critica a la presunta acción «progresista» de la actual administración. Esta perspectiva destaca las numerosas continuidades entre las estructuras económicas vigentes durante la convertibilidad y la actualidad. Se acusa al gobierno, en otras palabras, de no haber hecho lo suficiente para quebrar la estructura inequitativa del modelo anterior, o sea para generar una verdadera discontinuidad con el modelo neoliberal, gestado a partir del régimen militar. Al contrario, la actual administración ha sabido convivir con esas torceduras a través de compromisos con los grupos económicos más poderosos a costa, se subraya, de las posiciones relativas de los trabajadores. En esta perspectiva, deben distinguirse las mejoras en términos absolutos respecto de los peores momentos de la crisis; gracias, fundamentalmente, a una recuperación de los consumos, de una evaluación de más largo plazo que incluya todo el periodo centrado en la liberalización y financiarización de la economía, a partir del golpe de 1976.

A continuación se destacan algunas de las continuidades más evidentes entre esta década y las anteriores:

a) permanece la importancia preponderante de los sectores agroexportador y productor de commodities energéticas (como el petrolero y el minero), sectores por lo demás altamente concentrados. La dependencia de la economía argentina de la evolución de los mercados internacionales fue demostrada por las consecuencias negativas que la crisis internacional tuvo sobre el crecimiento del País en el año 2009 (Varesi, 2010);

b) se ha profundizado todavía más el proceso de concentración económica que había comenzado durante el régimen militar. El nivel de extranjerización tampoco ha disminuido considerablemente (Azpiazu y Schorr, 2010);

¹¹ La evolución de la popularidad del gobierno puede ser medida con el Índice de confianza del gobierno, elaborado por la Escuela de gobierno de la universidad Di Tella sobre la base de una encuesta de opinión que se elabora mensualmente desde octubre de 2001. Los datos muestran una caída del índice del 30% durante 2008, declinación concentrada en la fase de conflicto con el campo, entre marzo y julio (-35%). 2009 fue marcado por una ulterior caída del 24%. 2010 significó un cambio de tendencia, al mostrar un crecimiento del 60% hasta octubre 2011. En el mes posterior a la muerte de Néstor Kirchner (27 de octubre de 2010) se registra un crecimiento del 42% en tan solo 30 días. Por último, el crecimiento interanual que conduce a la reelección de Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 2011 marca un crecimiento del 54%, por lo que resulta evidente el impacto significativo, y emotivo, de la muerte de Kirchner sobre la opinión pública argentina.



c) el salario sigue constituyendo una variable de coste, más que un componente de la demanda de las empresas, contrariamente al ideal peronista de conciliación entre los intereses de capital y trabajo. Después de su reducción en términos reales por la devaluación, el salario ha recuperado su poder adquisitivo a tasas inferiores al aumento de la productividad. De ahí deriva que el reparto funcional (la cuota de los ingresos nacionales que va a los salarios) no haya mejorado, o haya mejorado marginalmente, gracias simplemente al aumento del número de personas empleadas, más que a una recuperación relativa del salario frente al beneficio. Fue apenas en 2009 que la participación de la masa salarial retornó a valores similares a los de 2001 (Kennedy, 2012);

d) el problema de la deuda pública no ha tenido una resolución definitiva después del default. La deuda pública sigue estando en niveles superiores al 2001 respecto al Pib (Cifra-Cta), no obstante la quita negociada con los acreedores¹², y los recursos fiscales destinados a la deuda siguen constituyendo una partida muy importante del presupuesto (marcando en 2009 alrededor de un 2,6% del Pib, valores similares a los de 1998). Ya que la estructura tributaria mantiene una estructura regresiva, el coste del servicio de la deuda no está repartido ecuánimemente entre la población¹³ (Varesi, 2010);

e) por último, el nuevo gobierno no ha sabido fomentar el surgimiento de un nuevo modelo productivo, lo que se ha traducido en una declinante dinámica de las inversiones productivas, en desaceleración desde 2003. Este proceso genera cuellos de botella en la oferta productiva, una vez que la capacidad ociosa haya sido utilizada (Varesi, 2010). Los capitales, como en la fase final de la convertibilidad, se fugan al extranjero y no son reinvertidos en el País¹⁴.

Entre las dos perspectivas se sitúa obviamente el oficialismo, aunque desde el punto de vista de los ideales y de la retórica su posición es seguramente más cercana a la segunda posición, favorable al desarrollo de un sector productivo nacional y a una redistribución de la riqueza que favorezca el bienestar de las clases trabajadoras. Las posturas oficiales suelen destacar la evolución positiva de todos los indicadores socio-económicos, en particular los laborales. Las comparaciones suelen hacerse respecto del momento de pico de la crisis, y se considera el periodo posterior al 2003 como el de la instauración de un nuevo modelo de crecimiento con inclusión social. En la próxima

¹² En parte esto fue causado por la salida de la crisis: la pesificación asimétrica constituyó una gran transferencia a favor de la gran empresa, que vio licuadas sus deudas (Costa, Kicillof y Nahón, 2004). Para compensar el sistema financiero de las pérdidas de la devaluación, el Estado emitió nueva deuda pública. Además, buena parte de la nueva deuda pública emitida fue indexada tanto al crecimiento del Pib como a la inflación, lo que ha provocado su crecimiento en términos reales en estos últimos años.

¹³ Una excepción está constituida por las retenciones a las exportaciones que miran a extraer parte de los superbeneficios obtenidos por el sector primario-exportador a raíz de la devaluación. También la estatización de la previsión social generó nuevos ingresos fiscales (las contribuciones de los trabajadores) que han permitido hacer frente al aumento del servicio de la deuda y mantener el superávit fiscal.

¹⁴ El Banco central de la República argentina reporta una fuga de capitales acumulada desde 2008 de 70 mil millones de dólares (entre 2003 y 2008 se habían fugado 17 mil millones de dólares) con un máximo histórico de 23 mil millones en 2008, coincidiendo con el conflicto agropecuario y la estatización de los fondos previsionales privados (ver más abajo). Para más detalles véase Bcra (2012).

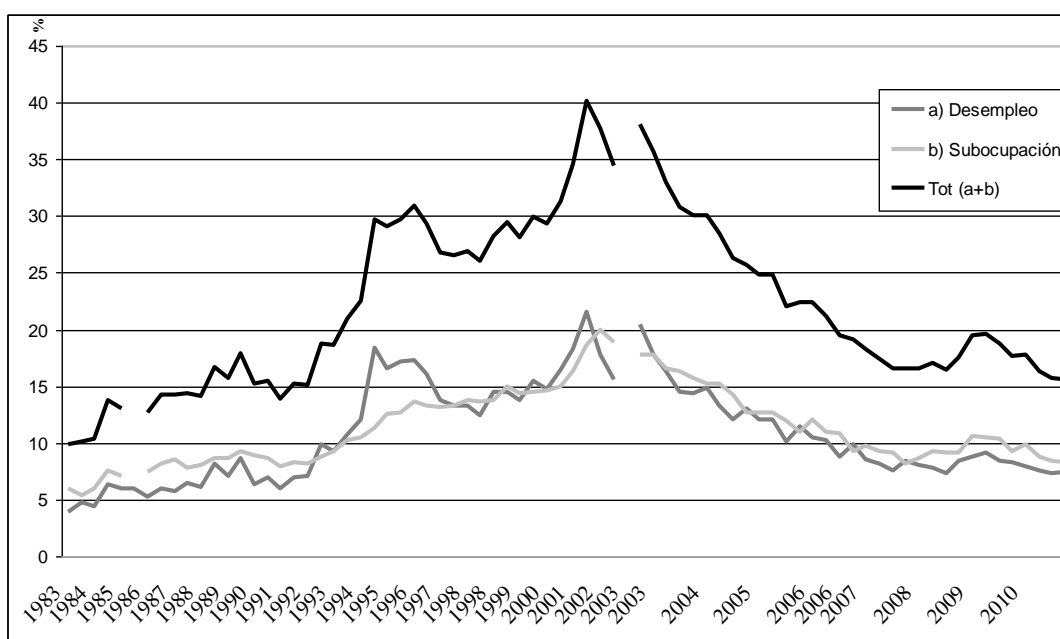


sección se pasará a evaluar precisamente la relación entre retórica gubernativa y realidad fáctica.

3. Entre coyuntura económica y transformación de las políticas públicas

A partir de una evaluación de los indicadores socio-económicos, cabe destacar el que quizás es el resultado más rotundo de los últimos años desde el punto de vista social, es decir, la fuerte recuperación del mercado laboral argentino, evidente en la marcada reducción del desempleo, el que fuera el problema más acuciante del País en la década de los Noventa. Entre los factores que pueden explicar esta evolución, deben citarse el elevado crecimiento del Pib (ver Fig.1), motorizado por la recuperación de los consumos; un cierto grado de reindustrialización (gracias al efecto proteccionista de la devaluación); la reutilización de la capacidad ociosa; el fuerte crecimiento de la construcción residencial y las divisas que genera el sector exportador. La Fig.3 muestra que el proceso ha sido particularmente rápido en los primeros años de recuperación, pero se ha mantenido hasta tiempos recientes, pese a un pequeño repunte en 2009 causado por la crisis internacional.

Fig.3 - Subutilización de la fuerza trabajo. Desempleo y subocupación en la Argentina urbana (1993-2010)



Fuente: Elaboración propia sobre datos Indec. Hasta 2003 datos semestrales; posteriormente trimestrales.

La tasa de empleo había permanecido por debajo del 37% hasta 2003, con mínimos del 34% durante la crisis del Tequila (mayo 1996) y del 32% durante 2001-2002. La recuperación económica a partir de 2003 se ha traducido en una mejora sustancial del



mercado laboral: la población activa ha alcanzado tasas superiores al 46% al final de la década y la tasa de empleo ha subido al 42%. Se trata de un factor importante ya que del empleo formal derivan en Argentina el acceso a un conjunto de derechos sociales a través de la seguridad social (tanto para el sistema previsional como para el sistema sanitario). Pero de este tema se tratará a continuación. Debe destacarse una vez más cómo a partir de 2007, el crecimiento del empleo ha sido más reducido (más allá del repunte debido a la crisis económica en 2009).

Es entonces en el análisis del mercado laboral donde reside la clave para evaluar la acción de las administraciones Kirchner. Este fue el sector donde quizás más claramente se haya visto la intención política de mejorar la posición de los trabajadores, en particular en temas de protección del puesto de trabajo y de negociación colectiva (esta sección se basa en Panigó, Chena y Makari, 2010). En particular, la reforma laboral de 2004 (ley 25877) aporta una serie de novedades que derogan a las modificaciones efectuadas durante los años Noventa. Por efecto de la nueva legislación, la cantidad de negociaciones colectivas y de trabajadores cubiertos por las mismas, se ha incrementado desde entonces, generando una ampliación de la cobertura de los convenios. En la misma óptica se introduce una normativa que busca luchar contra el trabajo no registrado, sobre la base de una triple estrategia de simplificación de los procedimientos, incremento de la supervisión laboral y penalización del incumplimiento de la ley¹⁵. Es lo que Palomino (2007) llega a considerar una verdadera transformación en la estructura del mercado laboral, en dirección de un régimen de creación de empleo con protección social, que habría sustituido al anterior régimen de precarización laboral.

En este proceso el gobierno intervino a través de nuevas normativas que favorecieron el blanqueamiento y la regularización de los trabajadores. En 2006 por ejemplo, la Afip (Administración federal de ingresos públicos, el organismo que se ocupa de la recaudación) implementó una moratoria que permitió la regularización de más de 350.000 empleadas domésticas, hasta alcanzar unas 418.000 trabajadoras registradas en 2009. No obstante quedaban en ese momento unas 580.000 en una posición laboral irregular (Anses, 2010).

Por otra parte, se buscó reducir el abuso de formas de contratación no convencional (las pasantías, los periodos de prueba), se reafirmó la cuantía de las indemnizaciones por despido y se instrumentaron unas medidas de fomento del empleo para favorecer la actualización de las competencias y la inserción laboral de los desempleados (por ejemplo, el seguro de capacitación y empleo, creado en 2006). Igualmente importante ha sido el constante aumento del salario mínimo que, aunque afecte directamente sólo a una pequeña cuota del empleo formal, ha demostrado ejercer un efecto arrastre sobre todos los salarios en el mercado laboral (Cornia, 2010). Entre 2005 y 2010 el salario mínimo se multiplicó casi tres veces y media en términos reales¹⁶.

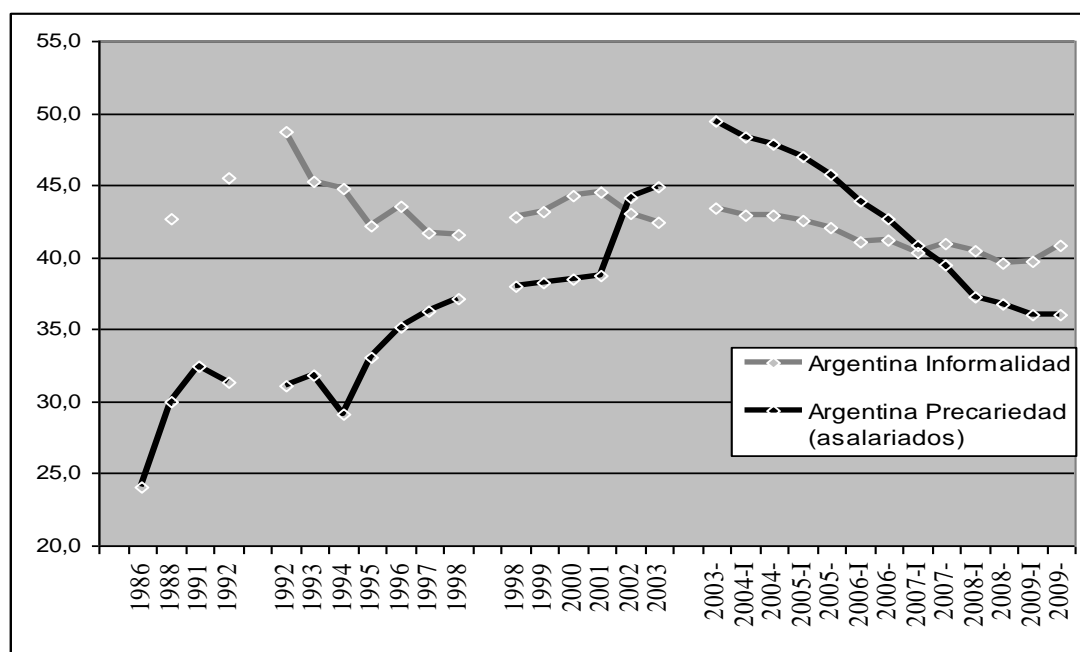
¹⁵ Paralelamente se originó una jurisprudencia más restrictiva respecto a las conductas de precarización del trabajo, especialmente en el ámbito de la subcontratación (Palomino, 2007).

¹⁶ Si se descuenta por la tasa de inflación, por ejemplo, de Cifra-Cta (2011) el crecimiento es menos espectacular (de 2,5 veces). La fuente para el salario mínimo es el Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social.



El elemento más importante ha sido, sin embargo, la reducción de la cuota de empleo no registrado sobre el total, ya que se trata de trabajadores irregulares que no aportan a la seguridad social y por lo tanto carecen de muchos derechos sociales. En la Fig.4 puede verse que, de hecho, el porcentaje de trabajadores asalariados desprovistos de cobertura social – en el gráfico están representados por el espacio situado por encima de la línea que representa los asalariados que sí aportan a la seguridad social – ha disminuido considerablemente desde los picos alcanzados durante la crisis de 2001-2002, aunque permanecen en un nivel elevado, de alrededor de un 35%, como a mitad de los años Noventa.

Fig.4 - Precariedad e informalidad en Argentina



Fuente: Elaboración propia sobre datos Cedlas (2011).

Por otra parte, la misma figura demuestra que la estructura económica del País no ha variado significativamente ya que una cuota muy significativa de la población empleada (el 40%) sigue situada en el sector informal de baja productividad de la economía (hecho resaltado también por Salvia *et al.*, 2008). No obstante, el incremento del empleo registrado repercutió en una extensión de la cobertura previsional y de los seguros de salud ligados a la seguridad social (las obras sociales)¹⁷. En cifras, esto se ha debido a la creación de alrededor de dos millones y medio de nuevos empleos registrados en el sector privado, hasta alcanzar una cifra cercana a los 6 millones de puestos de trabajo totales (Neffa *et al.*, 2010). Claro está que no todo este incremento se ha debido a la acción

¹⁷ Un examen detallado del sector salud argentino y de las mejoras acontecidas en la última década puede verse en Cetrángolo *et al.* (2011).



directa del gobierno en la regularización del empleo no registrado. En buena medida se debe a la creación de puestos de trabajo en el sector privado gracias a las elevadas tasas de crecimiento económico. No obstante, a causa de la persistencia del sector informal, incluso durante la «etapa rosa» de la posconvertibilidad (Cenda, 2010), es decir los años de mayor creación de empleo, casi un 30% del cambio total en el número de asalariados se explica por un incremento de los empleos no registrados, especialmente en el sector de la construcción y del servicio doméstico (Lindenboim, 2008).

Quizás el efecto de las políticas del gobierno sea más visible si se examina la ampliación de la cobertura del sector previsional. En este ámbito, las reformas se han centrado en una mayor intervención pública, que ha devuelto protagonismo absoluto al Estado, de forma que el sector ha sufrido una transformación profunda en dirección opuesta a las reformas implementadas a mitad de los años Noventa.

La reforma del sistema previsional de 1994¹⁸ preveía un sistema mixto público-privado para los trabajadores activos (los jubilados y pensionados mantenían el sistema público anterior), quienes obtendrían una cuota de pensión de reparto pública y una parte derivada de la capitalización de su cuenta privada. Las consecuencias de su implementación fueron principalmente negativas, sin que se lograra mejorar la eficiencia y la cobertura del sistema. En primer lugar, la reforma provocó un incremento del déficit fiscal del Estado que mantuvo la responsabilidad de la erogación de las pensiones preexistentes, sin poder financiarlas con los aportes de los trabajadores activos (registrados). Las contribuciones de los trabajadores fueron captadas por las empresas privadas (Afjp-Administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones), que percibían comisiones de alrededor de un 30% de los aportes salariales. Además el peso de la financiación de sistema recayó prevalentemente sobre los trabajadores, ya que se concretó una reducción consistente de los aportes patronales de casi el 60%.

En segundo lugar, la reforma no logró incrementar significativamente el número de los aportantes y consecuentemente la cobertura del sistema disminuyó en los años sucesivos, por causa de la precarización de los ocupados y del desempleo, dejando a más de un tercio de los mayores de 65 años sin ningún tipo de cobertura (éstos suponían menos de un cuarto en 1994). A su vez, sólo un tercio de la población activa aportó al sistema (respecto a alrededor de la mitad en 1994), lo que afectaba los derechos previsionales futuros de buena parte de la población, ya que reducía el número de años de contribuciones en su haber. El Estado argentino se vio entonces obligado a garantizar un nivel mínimo de ingresos para distintas categorías de beneficiarios (por vejez, invalidez, etc.), a través de programas de pensiones no contributivas asistenciales.

¿Cómo han actuado los gobiernos de la etapa de la posconvertibilidad en este sector? A partir de 2003, el objetivo del gobierno ha sido ampliar la cobertura del sistema previsional, por un lado, y aumentar la capacidad adquisitiva de las personas mayores beneficiarias del sistema, por el otro. En primer lugar, a mayo de 2010 alrededor de 2.300.000 millones de personas, en edad de jubilación pero que no habían acumulado el número suficiente de años de contribución, se acogieron a la llamada «moratoria

¹⁸ En relación a este párrafo, véase Cetrángolo y Grushka (2004).



previsional», un proceso de incorporación facilitada al sistema de pensiones para autónomos y trabajadores precarios (en un 80% mujeres), vigente desde 2005 (Anses, 2010). Otra medida fue la prejubilación de los desempleados con número suficiente de años cotizados¹⁹. La mayor cobertura previsional tuvo un inmediato reflejo en una mayor afiliación de trabajadores retirados a través del Pami (Programa de atención médica integral, es decir la obra social – aseguradora de salud – de todos los beneficiarios de una pensión pública). En segundo lugar, en 2008 se procedió a la nacionalización del sistema de pensiones: de esta forma se unificaron los dos sistemas preexistentes (privado de capitalización y público de reparto) en uno sólo público, que pasó a recibir todos los aportes. En tercer lugar, las pensiones mínimas fueron periódicamente incrementadas, fueron otorgados aumentos de suma fija y algunos subsidios específicos para afiliados del Pami (la obra social – aseguradora de salud – de todos los pensionados argentinos). También los haberes medios se incrementaron en valor y su cuantía se ató al salario mínimo (con la ley de movilidad previsional), con el objetivo de que el poder adquisitivo real de los beneficiarios fuera protegido en el tiempo. La discrepancia entre inflación oficial y efectiva en estos últimos años pone en cuestión los incrementos reales para los beneficiarios, pero no hay duda de que el número de beneficiarios aumentó considerablemente. En otras palabras se privilegió la extensión del sistema a su profundización²⁰.

Si el sector previsional constituye el grueso de las transferencias monetarias gestionadas por el Estado, queda por evaluar el monto y el impacto de las políticas sociales más propiamente asistenciales. Estas últimas suelen asociarse al modelo liberal de políticas sociales de tipo estadounidense, ya que están focalizadas en paliar la condición de vida de los individuos que no logran obtener un sustentamiento mínimo a través del mercado. Según Isuani (2010), que analiza el periodo hasta 2006, este capítulo de gasto ha crecido después de la crisis pero ha permanecido en un nivel bajo del Pib (1,5%). La mayor parte del gasto social seguía estructurado según las líneas del modelo conservador, es decir centrado en la seguridad social, como se ha visto. Los datos del Ministerio de economía (2011) muestran un aumento del gasto público consolidado (nivel nacional, provincial y municipal) hasta cifras cercanas al 2% del Pib, aunque por ejemplo la previsión social multiplica por cuatro esa cifra (véase Tab.1²¹).

¹⁹ Debe decirse que alrededor de la mitad de los recursos del sistema no proviene de los aportes sino de la fiscalidad general (donde, como se dijo, el peso de los impuestos indirectos regresivos es preponderante). En este sentido, la ampliación de la cobertura a favor de los no aportantes ha ido en la dirección de una mayor progresividad del sistema.

²⁰ Para un examen detallado de este sector, véase Danani y Hintze (2012).

²¹ Desafortunadamente los datos sobre gasto público consolidado proporcionados por el Ministerio de economía argentino están actualizados sólo hasta 2009.



Tab.1 - Estadísticas de gasto público consolidado

	Media de los periodos en % del Pib						
	1980-1984	1985-1989	1990-1994	1995-1999	2000-2002	2003-2006	2007-2009*
Gasto público total	28,19	32,13	31,29	31,69	32,86	30,66	39,17
al neto del servicio de la deuda	24,28	29,27	29,35	29,02	28,79	28,42	36,70
Gasto público social	12,93	16,83	19,86	20,61	21,09	19,70	24,88
en % de	53,25	57,50	67,67	71,02	73,26	69,31	67,80
Previsión social	4,33	6,30	8,18	7,84	7,70	6,35	8,55
Asistencia social	0,73	1,04	0,98	1,18	1,27	1,58	1,96
Gasto servicios económicos	6,73	7,46	3,64	2,32	1,61	3,03	5,25
							*datos provisionales para 2009

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Ministerio de economía de Argentina (2011).

Las estadísticas de gasto público consolidado permiten formular otras consideraciones. En primer lugar permiten distinguir entre una primera fase más conservadora en términos de gasto público (hasta 2006), y una segunda fase de elevado crecimiento del gasto público (a partir de 2007). Sin embargo la prioridad atribuida al gasto público social, contrariamente a lo que podría esperarse de una administración de izquierda, no ha aumentado en el periodo kirchnerista. El gasto en previsión social, a causa de la moratoria previsional, se incrementa en dos puntos sobre el Pib, respecto al primer periodo poscrisis²². No obstante, quiere señalarse el incremento considerable del gasto en servicios económicos, que está constituido en su mayor parte por el gasto creciente en subsidios a los precios de la energía, los servicios de transporte, etc.²³. Se trata de subsidios al productor que repercuten en menores precios al consumo. Una transferencia de este tipo no es progresiva (beneficia a todo consumidor por igual), aunque puedan beneficiar considerablemente a los grupos de bajo ingresos que consumen la totalidad de su renta.

La emergencia económica y los conflictos sociales surgidos a raíz de la crisis de 2001-2002 impulsaron efectivamente la creación por parte de la administración de Eduardo Duhalde de programas especiales para afrontar la situación, entre ellos el Programa de emergencia alimentaria y el Plan de transferencia condicionada (Jefes y jefas de hogar desocupados-Jjhd)²⁴, que llegaron a incluir una parte significativa de la población. Este último plan llegó a abarcar a casi dos millones de personas en 2003. El hecho de que su cuantía no fuera indexada según la inflación, hizo que su

²² En esos años los salarios y jubilaciones públicas permanecieron prácticamente congelados en términos reales, de modo que su peso sobre el Pib se redujo considerablemente (Costa, Kicillof, Nahón, 2004).

²³ Solo en el segundo mandato de Cristina Fernández se empieza el proceso de reducción de los mismos.

²⁴ Los datos para este párrafo derivan de Halperin Weisburd (2007).



monto real disminuyera con el tiempo. Junto con la reactivación del mercado laboral este factor hizo que en 2008 quedaran poco más de 700.000 personas acogidas al plan (Gasparini y Cruces, 2010).

Una parte importante de las mujeres que formaban la gran mayoría del Plan Jjhd se transfirieron al llamado Plan familias que, contrariamente al Jjhd, no requiere contraprestaciones laborales sino está condicionado al seguimiento de programas sanitarios y educativos a favor de los niños de los hogares beneficiarios, y cuyo monto es en función del número de hijos. A este programa se han ido acogiendo casi 600.000 familias, es decir, alrededor de 2 millones de personas. Recientemente, el programa Asignación universal por hijo (Auh), tiene el propósito ambicioso de universalizar las asignaciones familiares, antes reservadas a los trabajadores del sector formal, según el nivel salarial (*ibid*). De esta forma se busca beneficiar a 5.700.000 niños en familias con personas adultas desocupadas o que trabajan de forma irregular, lo que significa un aumento significativo de la partida destinada a transferencias condicionadas hasta casi un 5% del presupuesto nacional (Cogliandro, 2010). La novedad del Auh consiste en complementar las preexistentes asignaciones familiares para trabajadores registrados y brindar una ayuda frente a los gastos que derivan del cuidado de los niños, del que las familias argentinas sin empleo formal carecían. Si bien estas políticas son de compleja organización y pueden dejar espacio a la proliferación de prácticas clientelistas, no puede negarse que han logrado paliar las necesidades de corto plazo de las familias más necesitadas. Debe decirse que este plan mantiene unos requisitos de condicionalidad, que diferencian estas transferencias de las asignaciones familiares para los asalariados registrados. Por esta razón no puede definirse como una política estrictamente universalista, independiente de la posición en el mercado de los beneficiarios. Lo que sí se logra es una cobertura casi completa de la infancia, aunque segmentada por estatus ocupacional y nivel salarial²⁵.

4. Conclusiones

Esta revisión preliminar de la etapa de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner permite formular algunas consideraciones. Una primera conclusión es que las políticas sociales tuvieron una inspiración de carácter incluyente y estuvieron en el centro de la acción de gobierno. En este sentido, sostuvieron proactivamente el proceso de inclusión que se originaba en el mercado laboral y, al mismo tiempo, generaron el consenso político del que han gozado las dos administraciones, en particular de parte de las clases menos acomodadas, al centro de las políticas de asistencia social y ampliación del sistema contributivo. Para las clases medio bajas golpeadas por la crisis, la reactivación del mercado laboral supuso su re-

²⁵ Los menores que quedan sin cobertura son 1,1 millones, el 9% del total. 600.000 menores no están cubiertos por el sistema de asignaciones, pero brindan a sus familiares una deducción fiscal al impuesto a las ganancias, por lo que quedan cubiertos bajo esta modalidad (Danani y Hintze, 2012).



inclusión en el sistema de la seguridad social, un motivo que impulsó la recuperación de sus consumos. Para evaluar la relevancia relativa de los dos elementos (lo coyuntural y lo político) es necesario, claro está, profundizar en el análisis cuantitativo. No obstante, los datos preliminares parecen confirmar que el crecimiento del sector formal se trasladó directamente a una ampliación de la cobertura de la seguridad social y de su financiación, permitiendo que un mayor número de beneficiarios pudiera tener acceso a mejores servicios de salud y protección contra la vejez. En otras palabras, la buena situación económica permitió revertir en parte los procesos de exclusión social que se venían gestando desde la dictadura militar y que habían alcanzado picos extremos durante la crisis de 2001-2002. Esto ocurrió en presencia de numerosas continuidades con el periodo anterior, que han sido debidamente destacadas. En este sentido, esta fase no ha generado una redistribución radical de la riqueza hacia las clases más bajas, como debería esperarse de un gobierno tachado de neo-populista.

Este último elemento, sugiere aventurarse en una reflexión de carácter más general. Los datos examinados evidencian un incremento del esfuerzo fiscal del gobierno en aumentar la financiación del gasto público social en el periodo considerado. La administración ha dejado, por lo demás, que los grandes grupos económicos desarrollaran sus negocios con gran libertad. Ha contribuido, con un creciente gasto en subsidios a la producción (ver Tab.1), a que la recuperación de la rentabilidad de las empresas de servicios no repercutiera en el gasto sostenido por las familias. Los recursos para implementar estas políticas han derivado principalmente de los impuestos sobre el comercio exterior. En este sentido, no son visibles los cimientos de una política de largo plazo con vistas a transformar la estructura productiva hacia producciones de mayor valor agregado, sino que se ha aprovechado de la situación internacional favorable y los bajos costes laborales para dinamizar la economía y sostener la rentabilidad del sector privado. Una vez que la inflación ha erosionado la competitividad de las empresas productoras de bienes transables y que la crisis internacional ha limitado el crecimiento de las exportaciones, el gobierno ha tenido que implementar medidas crecientemente agresivas para equilibrar la balanza de pagos (desde prácticas proteccionistas a controles cambiarios)²⁶.

En el caso argentino, hay algunas medidas que han incidido en la estructura productiva y han generado una redistribución de los recursos hacia los sectores más débiles a través de las políticas asistenciales (por ejemplo las retenciones a las exportaciones o la estatización de la previdencia); sin embargo el objetivo primario de estas políticas no era el distributivo, sino el cambiario (obtener divisas) y el fiscal, por la persistente ineficacia de los gobiernos argentinos (como de muchos otros gobiernos de la región) de poner mano al sistema tributario a través de un impuesto sobre la renta auténticamente progresivo y universal. En este sentido, aun movido por ideales progresistas, el gobierno ha debido llegar evidentemente a compromisos con los grupos económicos más poderosos renunciando a promover una redistribución más progresiva

²⁶ La última medida del gobierno ha sido la polémica, en el exterior, expropiación de la mayoría accionaria de YPF, la principal empresa petrolífera del País.



de los ingresos, que sirva de base para un desarrollo social más incluyente, coadyuvado por políticas sociales universalistas.

Referencias bibliográficas

- Anses (Administración nacional de la seguridad social), *Análisis de la cobertura previsional del Sipa. Protección, inclusión e igualdad*, Gerencia de estudios de la seguridad social, Buenos Aires, 2010.
- Azpiazu D., Schorr M., *La difícil reversión de los legados del neoliberalismo. La recuperación industrial en Argentina en la posconvertibilidad*, «Nueva Sociedad», 225, 2010, pp.31-47.
- Basualdo E., *Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual*, Ed. Atuel, Buenos Aires, 2011.
- Bcra (Banco central de la república argentina, *Evolución en el mercado único y libre de cambios y balance cambiario*, en línea: Caballero G., Gallo A., *Las dinámicas institucionales del éxito y del fracaso económico: un análisis institucional histórico comparativo de España y Argentina (1950-2000)*, «Revista de Economía Mundial», 20, 2008, pp.99-137.
- Cedlas (Centro de estudios distributivos laborales y sociales), *Guía metodológica*, Universidad nacional de La Plata, La Plata, 2010.
- Cedlas (Centro de estudios distributivos laborales y sociales), *Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean*, Universidad nacional de La Plata en colaboración con el Banco mundial, La Plata, 2011.
- Cenda, *La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual. La economía argentina del período 2002-2010*, Ed. Atuel, Buenos Aires, 2010.
- Centro de estudios públicos, Fundación Centro de Estudios Públicos, Buenos Aires. En línea: <http://www.cep.org.ar>.
- Cepal (Comisión económica de América Latina y el Caribe), *Panorama social de América Latina*, Santiago de Chile, 2011, en línea: www.eclac.cl/id.asp?ID=45171.
- Cetrángolo O., Grushka C., *Sistema previsional argentino: crisis, reforma y crisis de la reforma*, Cepal, Santiago de Chile, 2004.
- Cetrángolo O., San Martín M., Goldsmith A., Lima Quintana L., *El sistema de salud argentino y su trayectoria de largo plazo: logros alcanzados y desafíos futuros*, Cepal/Ops/Pnud, Buenos Aires, 2011.
- Cifra-Cta, *El nuevo patrón de crecimiento. Argentina 2002-2010. Informe de Coyuntura*, Buenos Aires, 2011.
- Cogliandro G., *El programa asignación universal por hijo para protección social y los cambios en los programas de transferencias condicionada*, Fundación Siena, WP 12, Buenos Aires, 2010.
- Cornia G.A., *Income Distribution under Latin America's New Left Regimes*, «Journal of Human Development and Capabilities», 11 (1), 2010, pp.85-114.



- Costa A., Kicillof A., Nahón C., *Las consecuencias económicas del sr. Lavagna. Dilemas de un País devaluado*, «Realidad Económica», 203, 2004, pp.70-100.
- Danani C., Hintze S., *Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010*, Ed. Ungs, Buenos Aires, 2012.
- Diaz Alejandro C., *Ensayos sobre la historia económica argentina*, Amorrurtu, Buenos Aires, 1975, en línea: http://www.indec.mecon.ar/principal.asp?id_tema=1395, en línea: sedlac.econo.unlp.edu.ar.
- Escuela de gobierno, *Índice de confianza del gobierno*, Universidad Di Tella, en línea: <http://www.utdt.edu>.
- Fmi (Fondo monetario internacional), *World Economic Outlook*, Washington, 2011, en línea: <http://www.imf.org/external/data.htm>.
- Gasparini L., Cruces G., *Las asignaciones universales por hijo. Impacto, discusión y alternativas*, Cedlas, WP 102, La Plata, 2010.
- Gerchunoff P., Fajgelbaum P., *Porqué Argentina no fue Australia? Una hipótesis sobre el cambio de rumbo*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.
- Halperin Weisburd L. (director), *Políticas sociales en la Argentina. Entre la ciudadanía plena y el asistencialismo focalizado en la contención del pauperismo*, Ceped, Cuaderno 10, Buenos Aires, 2007.
- Ieral (Instituto de estudios sobre la realidad argentina y latinoamericana), *Una nueva visión económica para Argentina*, Fundación Mediterránea - WP 85, Córdoba, 2011.
- Indec (Instituto nacional de estadísticas y censo), *Encuesta permanente de hogares*, Buenos Aires, varios años.
- Isuani E.A., *The Argentine Welfare State: Enduring and Resisting Change*, «International Journal of Social Welfare», 19 (1), 2010, pp.104-114.
- Kennedy D., *Economía política de la contabilidad social. Vínculos entre la teoría de la riqueza social y sus formas de cuantificación*, Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, 2012.
- Lindenboim J., *Auge y declinación del trabajo y los ingresos en el siglo corto de la Argentina*, en Lindenboim J. (editor), *Trabajo, ingresos y políticas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI*, Eudeba, Buenos Aires, 2008, pp.6-23.
- Lindenboim J., *Las estadísticas oficiales en Argentina ¿Herramientas u obstáculos para las ciencias sociales?*, «Trabajo y Sociedad», XV (16), 2011, pp.19-38.
- Ministerio de economía de la República argentina, *Series de gasto público consolidado*, en línea: http://www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/series_gasto.html.
- Neffa J.C., Oliveri M.L., Persia J., *Transformaciones del mercado de trabajo en Argentina: 1974-2009*, «Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales», 2, 2010, pp.19-48.
- Palomino H., *La instalación de un nuevo régimen de empleo en Argentina: de la precarización a la regulación*, «Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo», 12 (19), 2007, pp.121-144.
- Panigó D., Tupac P., Chena I., Ailín Makari P., *Las transformaciones en la normativa socio-laboral del nuevo modelo de desarrollo argentino*, «Atlántida. Revista Canaria de Ciencias Sociales», 2, 2010, pp.49-72.



- Panizza F., Miorelli R. *Populism and Democracy in Latin America*, «Ethics & International Affairs», 23 (1), 2009, pp.39-46.
- Salvia A., Comas G., Gutiérrez Ageitos P., Quartulli D., Stefani F., *Cambios en la estructura social del trabajo bajo los regímenes de convertibilidad y posdevaluación. Una mirada desde la perspectiva de la heterogeneidad estructural*, en Lindenboim J. (editor), *Trabajo, ingresos y políticas en Argentina. Contribuciones para pensar el siglo XXI*, Eudeba, Buenos Aires, 2008, pp.115-159.
- Transparencia internacional, *Corruption Perceptions Index 2011*, Berlin, en línea: <http://cpi.transparency.org/cpi2011/>.
- Varesi G.A., *La Argentina posconvertibilidad: modelo de acumulación*, «Problemas del Desarrollo», 41 (161), 2010, pp.141-163.
- Waisman C.H., *Reversal of Development in Argentina: Postwar Counterrevolutionary Policies and their Political Consequences*, Princeton University Press, Princeton, 1987.
- World justice program, *Rule of Law Index*, Washington, 2011, en línea: <http://worldjusticeproject.org/>.